

C.A. de Santiago

Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés.

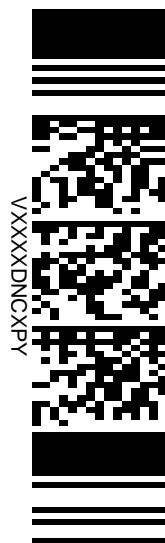
Vistos:

Se sustituye en el motivo decimonoveno el guarismo “\$70.000.000” por \$100.000.000.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que por sentencia de veinticinco de julio de dos mil veintidós, dictada por el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-7305-2020, caratulada “Retamal con Fisco de Chile”, se acogió la demanda deducida por Miguel Retamal Maureira en contra del Fisco de Chile, disponiendo que el Estado de Chile debe pagar como indemnización de perjuicios por daño moral al actor la suma de \$70.000.000, con reajustes según variación experimentada por el índice de Precios al Consumidor, entre el mes anterior a aquél en que la presente sentencia quede ejecutoriada, y el anterior al del pago efectivo de la indemnización, sin costas.

Segundo: Que contra la aludida sentencia se alzaron la parte demandada y demandante. El Fisco de Chile en su recurso solicita se revoque el fallo y se rechace íntegramente la demanda interpuesta en autos, o, en subsidio, que se rebaje sustancialmente el monto fijado a título de indemnización por daño moral, a la suma que esta Corte se sirva fijar. Por su parte el demandante en su apelación, pide se confirme la referida sentencia, con declaración que se eleva el monto indemnizatorio a la suma demandada, esto es, de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) u otra mayor que la



fijada en primera instancia y que se considere prudencial acorde al mérito del proceso, con costas.

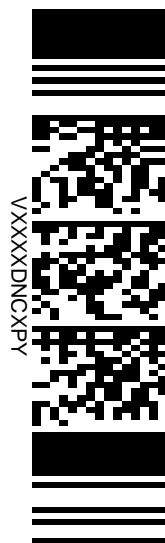
I.- En cuanto al recurso del Fisco de Chile:

Tercero: Que los argumentos de la apelación del Fisco son básicamente tres. El primero de ellos es rebatir lo decidido respecto de la excepción de reparación integral, insistiendo que esta debió ser acogida, puesto que de los antecedentes reunidos en el juicio, en particular el oficio del IPS, agregado al proceso, consta que la demandante ha percibido por concepto de pensión y otros beneficios, la suma total de \$95.657.065.

Por ello, estima que la sentencia no aplica correctamente lo que se deriva de las leyes N° 19.123, N° 19.992 y N° 20.874, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en este sentido, de lo cual se deriva que al haber recibido la demandante beneficios en virtud de esa normativa, es incompatible pretender que el Fisco lo indemnice nuevamente por el daño moral sufrido.

Un segundo agravio de la sentencia radica en haber desestimado el fallo la excepción de prescripción, por cuanto, en su concepto, debió acogerse dicha alegación, ya que en sede civil la acción intentada no es imprescriptible, como lo razona la sentencia; por el contrario, la acción civil deducida prescribe como cualquier acción de esa naturaleza y cita jurisprudencia al afecto.

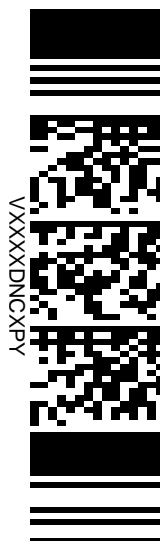
El tercer agravio lo hace consistir en que el monto del daño moral regulado no se sustenta ni respalda con la prueba rendida, para lo cual compara la suma a que fue condenado su representado en esta causa con otros casos de torturas, excediendo un marco prudente en esa determinación.



Cuarto: Que en lo que respecta al primer aspecto, concuerda esta Corte con lo expuesto por el fallo en alzada, en cuanto a que la indemnización por daño moral solicitada por esta vía es compatible con el régimen asistencial en cuya virtud se le han otorgado los beneficios y pagos percibidos por el actor, previsto en la normativa antes citada, pues esta acción tiene por objeto mitigar el daño individual del afectado, esto es, demandar el daño propio, lo que se traduce en el dolor, angustia y sufrimiento experimentado por el actor, a raíz de la detención ilegal de la cual fue víctima y de las torturas y vejaciones por agentes del Estado. De esta forma, solo cabe confirmar lo decidido en la sentencia en este aspecto.

En lo atinente a la prescripción extintiva, también coincide este tribunal de alzada, con lo manifestado por el tribunal a quo en el sentido que siendo la tortura un crimen de lesa humanidad, proscrito por Tratados Internacionales vigentes en nuestro país, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, no cabe acoger la prescripción alegada por el Fisco.

En efecto, de todos esos instrumentos internacionales se deriva que la acción civil para pedir la reparación del daño causado a las víctimas, a consecuencia de las torturas que le fueron impuestas en su momento, es imprescriptible, toda vez que la fuente que da origen a la reparación descansa en Tratados Internacionales de Derechos Humanos que deben ser aplicados con preferencia a las



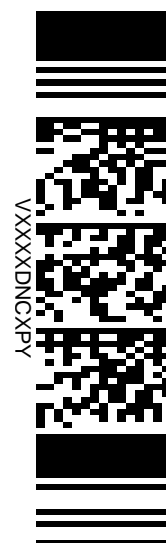
normas del Derecho Interno, por expreso mandato constitucional del artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental.

En lo relativo a la prueba del daño moral esta Corte comparte que la prueba rendida por el actor es suficiente para acreditar el daño moral que experimentó a raíz de la privación de libertad y torturas de que fue víctima, sin perjuicio de lo que se determinará respecto del monto o cuantía regulada en el fallo de primer grado.

II.- En cuanto al recurso de la demandante:

Quinto: Que el actor funda su recurso en que los daños ocasionados son de gran magnitud, atendidas las secuelas psicológicas de carácter permanente que le provocaron las vejaciones de que fue víctima y no se reparan con el monto fijado en la sentencia, sino con una suma superior a la fijada. El otro agravio por el que se alza es por las costas, solicitando que el demandado sea condenado a su pago.

Sexto: Que finalmente, esta Corte comparte los fundamentos invocados por el juez de primera instancia para determinar la procedencia del resarcimiento reclamado, estableciendo la existencia de padecimientos que deben ser indemnizados por constituir el daño moral que sustenta la demanda; sin perjuicio de que se estima que el monto fijado es insuficiente para resarcir al actor y cumplir con el principio de reparación integral que rige en la materia, considerando la entidad de los mismos al haber sido gravemente afectado en su salud física y psíquica, con daños permanentes. En efecto, ha quedado establecido que el actor estuvo detenido ilegalmente por más de un año, siendo sometido durante ese período a torturas, tratos vejatorios e inhumanos, y que luego permaneció en el exilio, todo lo cual, naturalmente, lo ha afectado psíquica y



emocionalmente ocasionándole traumas que truncaron las normales expectativas de vida, circunstancias que llevan a elevar el *quatum* de la indemnización a la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos), que se considera acorde con el *pretium doloris* del demandante.

Séptimo: Que no se condenará en costas al demandado, por estimarse que ha tenido motivos plausibles para litigar.

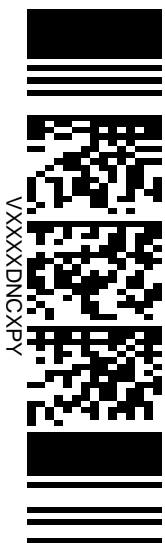
Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República; la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad; artículos 1.698 y 2.314 del Código Civil y artículos 186, 223 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se **confirma** la sentencia apelada de veinticinco de junio de dos mil veintidós, dictada por el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol C-7305-2020, caratulada “Retamal con Fisco de Chile”, **con declaración que se eleva** la indemnización por daño moral a la suma de \$100.000.000.- (cien mil pesos), con los reajustes indicados en el fallo que se revisa, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Carolina Brengi Zunino.

No firma el Ministro señor Sergio Guillermo Cordova, por encontrarse ausente.

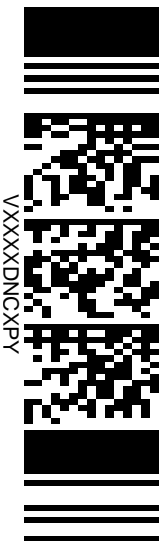
N°Civil-13594-2022.



Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señora Carolina Brengi Zunino, señor Sergio Guillermo Cordova y señor Eduardo Jequier Lehuede.

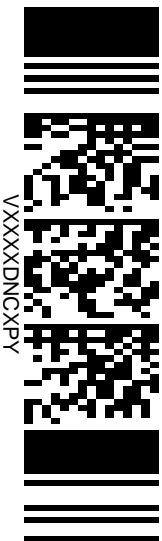
Autoriza el (la) ministro de fe de esta Illma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z. y Abogado Integrante Eduardo Jequier L. Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.